

## CONSERVADURISMO Y CUESTIÓN SOCIAL

*Feliciano Montero*

El período aquí presentado, 1890-1914, se corresponde, en el contexto del ambiente regeneracionista, con una época de afirmación optimista del reformismo social, de confianza en la virtualidad de la reforma social como cauce de superación positiva del conflicto social. Queda fuera el período siguiente, en el que paralelamente a la quiebra del sistema político, se sigue apelando, de forma quizá más urgente y desesperada, a la reforma social como panacea de la revolución social.<sup>1</sup>

En la época citada la presión obrera y popular era todavía relativamente escasa, por lo que es discutible establecer un estrecho paralelismo, como a menudo se ha hecho, entre reivindicación obrera y reforma social (o considerar las reformas sociales como conquistas obreras arrancadas mediante presión). Más bien parece que las iniciativas de los propagandistas y políticos de la reforma social obedecieron más a impulsos propios, copia con frecuencia de iniciativas europeas, que a presiones o amenazas externas. En España, como en otros países, la reforma social no fue tanto ni sólo la consecuencia mecánica de un determinado desarrollo de las fuerzas económicas o fruto de la presión social, sino el resultado de la convergencia de diversos factores entre los que no se puede descuidar el ideológico o mental.<sup>2</sup>

---

1. Sobre la política social del Estado en el conflictivo período 1914-1923 y la oposición patronal, véase F. del Rey, *Propietarios y patronos*, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1992.

2. Para la progresiva articulación de los diversos proyectos de reformas sociales en una perspectiva comparada, considerando preferentemente los factores ideológicos y políticos, véase Douglas E. Ashford: *La aparición de los estados de bienestar*, Ministerio de Trabajo, 1989 (1986 1.ª ed.). Desde una perspectiva social, véase

Los reformistas españoles se lamentaron siempre del retraso español, utilizándolo como argumento para impulsar las medidas reformistas, pero si se observa comparativamente en el marco europeo (exceptuando el caso de Alemania), el retraso de la legislación social española no es tan grande como a menudo se ha afirmado. Por ejemplo la ley de accidentes de 1900, con el reconocimiento del principio de «responsabilidad industrial», era avanzada para su época.

Generalmente, se tendió a atribuir a la izquierda liberal española (Moret, Azcárate, Buylla, Posada) todo el mérito de la implantación de la reforma social, y a la derecha conservadora la responsabilidad de las medidas represivas, defensivas. Este planteamiento parece hoy insostenible. Dato no es una excepción en el planteamiento conservador de la cuestión social. Los primeros pasos de la política social se deben en una buena medida a la iniciativa de políticos conservadores, desde el propio Cánovas, que inicia el giro social (paralelamente al proteccionista) en 1890, hasta Dato, el más representativo. A la prensa republicana española de 1890 lo que le escandalizaba era que los emperadores (Guillermo II), los papas (León XIII), los conservadores (Cánovas), es decir, las fuerzas del orden, abanderaran la reforma social. Es precisamente en el mundo liberal, salvando el grupo influido por el krausismo-institucionismo, donde la posición social reformista es más excepcional. En el cambio de siglo hablar de reformas sociales equivalía a impulsar el intervencionismo del Estado, criterio que chocaba frontalmente con uno de los principios liberales clásicos.

Tras una primera etapa de fuerte debate doctrinal, especialmente durante los años 90, el reformismo social intervencionista pasó a ser un criterio indiscutible y compartido. Todos los políticos empezaron a atribuirse entonces el mérito y prestigio de haber iniciado la reforma social. Comienza la etapa de colaboración práctica de hombres de procedencia distinta en la gestación de la primera legislación social y la primera administración laboral.

Es inútil, pues, entrar en la reivindicación apologética de atribuir el mérito de la reforma social a conservadores, católicos o liberales, pues hombres de todas esas procedencias participaron y colaboraron en esa tarea, aunque también se enfrentaron en torno a algunos criterios. Para perfilar bien la posición de los conservadores en relación con la reforma social, será útil compararla con la de los otros sectores que colaboran en la misma tarea: católicos y liberales-institucionistas. Pero siempre hemos de tener en cuenta que la divisoria política es escasa o nulamente significativa a la hora de caracterizar esas respectivas posiciones. Es relativamente indiferente que la iniciativa de un determinado proyecto de ley corresponda a un gobierno

---

P. Baldwin, *La política de solidaridad social. Bases sociales del Estado de Bienestar europeo, 1875-1975*, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1992. Una breve síntesis introductoria en G. Ritter, *El Estado social, su origen y desarrollo en una comparación internacional*, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1991.

conservador o liberal. En este sentido, uno de los ejemplos más significativos lo constituye la creación del Instituto de Reformas Sociales por decreto de un gobierno Silvela, sobre la base de un proyecto anterior preparado por el ministro Canalejas de un gobierno liberal.

La reforma social en España se plantea y avanza muy estrechamente vinculada al reformismo social europeo. Una minoría de la élite gobernante e intelectual española lee los libros de los reformistas, conoce las leyes y las instituciones sociales que se están implantando en Alemania, Francia, Bélgica, y participa en las instancias internacionales promotoras de la reforma social: Conferencia de Berlín de 1890, congresos internacionales de accidentes de trabajo y de seguros sociales, asociación internacional para la protección legal de los trabajadores. Por eso, cualquier estudio sobre el reformismo social en España tiene que empezar recordando el contexto internacional en el que surge el Estado de Bienestar en Europa (Alemania, Francia, Gran Bretaña...) y la presencia y participación española en esas iniciativas.<sup>3</sup>

### **Del impulso conservador a la tendencia intervencionista: de Cánovas a Dato**

*El giro «social» de Cánovas*, en torno a 1890, expresa la nueva preocupación por la «cuestión social», a raíz de las celebraciones del 1.º de mayo, y el eco, en los conservadores españoles, de la política social de Bismarck. Ése es el argumento central del discurso de Cánovas en el Ateneo de Madrid. Este giro «social», intervencionista, de Cánovas era paralelo al giro proteccionista en política económica.<sup>4</sup>

Poco antes, en 1889-90, se habían publicado los volúmenes de la *Información oral y escrita de la Comisión de Reformas Sociales*. La celebración de la información oral y escrita, con todos sus límites, debió de jugar un papel importante en la mentalización, sensibilización social de las élites. Dicha comisión, reorganizada, comenzó a partir de 1890 un trabajo modesto pero significativo de preparación de proyectos sociales («dictámenes y proyectos») que fueron la base de los proyectos sobre descanso dominical, trabajo

---

3. Los proyectos de leyes sociales y los de creación del IRS y del INP están llenos de referencias a modelos europeos. En el proceso de fundación del INP se llega a demandar la presencia permanente como consejero actuarial de algún destacado miembro de los seguros sociales belgas (Lefranc). Sobre la participación española en los congresos internacionales de accidentes de trabajo y de seguros sociales, véase F. Montero, *Orígenes y antecedentes del INP*, vol. 1.º de *Los seguros sociales en España*. Para el eco y la influencia de la legislación social extranjera en los proyectos españoles, véase diversas informaciones sobre la política social en Europa requerida a través de embajadas y consulados, en AHN, Gobernación, y en AMAE.

4. El discurso de Cánovas en el Ateneo de Madrid publicado en *Problemas contemporáneos*, vol. III, véase el estudio de J.M.ª Serrano Sanz sobre la política económica de la Restauración en estos años, *El viraje proteccionista en la Restauración*, Madrid, Siglo XXI, 1987.

de la mujer y de los niños y accidentes de trabajo, presentados, sin fortuna parlamentaria, por gobiernos conservadores y liberales, hasta los proyectos de Dato de 1899-1900.<sup>5</sup>

### *El debate intervencionista. La maduración de una nueva conciencia*

Entre el viejo y el nuevo conservadurismo, una de cuyas señas de identidad será la asunción de esa actitud social-reformista, va madurando en ambientes académicos y políticos una nueva conciencia ante la cuestión social, que implica una revisión de los postulados del liberalismo clásico. El argumento central de muchos discursos, debates y publicaciones de la época es la polémica cuestión del intervencionismo del Estado, su pertinencia, legitimidad y oportunidad. En ese debate va abriéndose lentamente camino el nuevo criterio, con lo que supone de crítica a los rígidos criterios abstencionistas de la libertad de trabajo y de contratación. Hombres procedentes de distintas ideologías y partidos irán convergiendo progresivamente hacia la aceptación de un prudente intervencionismo, que marca distancia respecto al modelo alemán de «socialismo de Estado». Hasta el punto de que, superada la polémica, a principios de siglo, conservadores, liberales y republicanos rivalizarán por capitalizar (patrimonializar) los orígenes de la política social en España, síntoma evidente del triunfo y prestigio político de los nuevos criterios.

Aceptado el hecho de la convergencia de hombres de distinta procedencia política en la configuración de los primeros pasos de la política social, parece que el protagonismo mayor correspondió a conservadores, algunos católico-sociales, tradicionalistas o alfonsinos, y republicanos vinculados al krausista-institucionismo. En conjunto, en la última década del siglo XIX, da la impresión que los conservadores son más permeables o menos resistentes que los liberales a la revisión de los criterios clásicos, en una dirección paralela a lo que ocurre con el giro proteccionista en política comercial.

Uno de los publicistas conservadores más representativos del giro «social» es Eduardo Sanz y Escartín. Su trilogía, *La cuestión económica* (1889), *El Estado y la reforma social* (1892) y *El individuo y la reforma social* (1896) es un buen exponente de la nueva posición conservadora en el debate del momento sobre el intervencionismo. Igualmente significativa es la evolución que se puede seguir en su ideología: desde el intervencionismo y proteccionismo más decidido, presente en los dos primeros libros, hasta la corrección

---

5. Sobre la CRS véase el libro de M.<sup>a</sup> Dolores de la Calle, *La Comisión de reformas Sociales, 1883-1903*, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1989, la reedición de la *Información oral y escrita*, estudio introductorio de S. Castillo; y para el debate académico y parlamentario sobre el intervencionismo que precede las leyes de Dato, véase mis artículos «La polémica intervencionista. El debate académico y el debate político-parlamentario», *Revista de Trabajo*, 59-60 y 61-62 (1980 y 1981); véase también J.A. Mellon, «La defensa social: Social-liberalismo y contrarrevolución en la España de fines del siglo XIX», *Estudios de Historia Social*, 54-55, 237-306.

moralista e individualista de un intervencionismo estatal excesivo que se aprecia en el último de los libros citados.<sup>6</sup>

En la década final del siglo XIX raro es el político, profesor, académico o publicista español que se precie que permanezca ajeno a la polémica. Abundan las definiciones al respecto. Pero quizá las mejores expresiones sean las que se manifiestan con ocasión de los debates en la Academia de Ciencias Morales y Políticas en los que participa la flor y nata de la política madrileña. Destacan especialmente dos debates: uno primero, en 1890, a propósito de la participación española en la conferencia de Berlín, convocada por Guillermo II para tratar de la posibilidad de acordar una legislación social internacional; y, sobre todo, el debate sobre «el socialismo de Estado», que se celebra a lo largo del curso 1894-95, en el que se aborda directamente la cuestión intervencionista. Es en este segundo debate donde quedan bien perfiladas las respectivas posiciones pro y anti-intervencionistas. Pero lo significativo es que, más allá de las diferencias de matiz, se abre camino un consenso bastante compartido sobre la inevitabilidad de un cierto moderado intervencionismo social del Estado, bien entendido, que a partir de ahora pocos se atreverán a discutir.

En el plano político y parlamentario, en los dictámenes y proyectos preparados por la Comisión de Reformas Sociales, en los proyectos presentados por los gobiernos conservadores y liberales, y, sobre todo, en los debates parlamentarios a que dan lugar los proyectos presentados por Dato en 1899-1900, se observa la misma confrontación, y posteriormente, progresiva convergencia de criterios, en torno al intervencionismo, que se da en los debates académicos, hasta el punto de que las discusiones más acaloradas sobre el proyecto de descanso dominical, no lo son tanto por diferencias de criterio sobre el intervencionismo, sino por la directa implicación de la cuestión político-religiosa en dicho proyecto (la jurisdicción e intervención de la Iglesia en esta cuestión, como precepto religioso).<sup>7</sup>

## **El regeneracionismo social. Primeras leyes laborales y nacimiento de la administración laboral. Dato y Canalejas**

Tras el paréntesis de la guerra de Cuba, la coyuntura regeneracionista posterior al 98 propició la culminación de debates y proyectos anteriores. Uno de los elementos que caracterizan el gobierno regeneracionista de Silve-

---

6. Al pensamiento social de Eduardo Sanz y Escartín, apenas estudiado y citado, dediqué un apartado de mi tesis doctoral inédita, *Reformismo conservador y catolicismo social en la España de la Restauración*, vol. I.

7. A diferencia del debate de 1900, el de 1891 sobre otro proyecto de descanso dominical presentado por Cánovas había tropezado también con la opinión anti-intervencionista, aún fuerte a principios de la década. De los tres proyectos presentados por Dato en 1899-1900, el de descanso dominical tendrá que esperar hasta 1904. Sobre estos debates véase mi tesis citada, y los artículos sobre *La polémica intervencionista...* citados más arriba.

la es precisamente ese conjunto de proyectos de reforma social que Dato presenta y que constituyen las primeras leyes laborales. *La ley de accidentes de trabajo*, con el consiguiente reconocimiento del principio del «riesgo profesional», es la que mejor expresa el inicio de una nueva etapa, que implica el paso del debate académico y el estudio «informativo» de la «cuestión social» al tratamiento político-jurídico de las cuestiones laborales (los orígenes de la política social). Muchos años después, Ángel Osorio en un libro autobiográfico<sup>8</sup> recordará el hito que suponía la ley de accidentes para un joven abogado como él que iniciaba su carrera profesional y política.

La ley de protección al trabajo de la mujer e infantil respondía a criterios menos innovadores, más paternalistas. Pero lo más interesante es que su aprobación obligaba a crear una mínima administración laboral, para vigilar, controlar y, en su caso, penalizar, el incumplimiento de la ley. En efecto, en la citada ley se contemplaba la creación de unas juntas locales y provinciales de reformas sociales. Las juntas locales nacían antes que el Instituto de Reformas Sociales, los inspectores de trabajo y los tribunales de conciliación y arbitraje, pero todas estas instituciones tenían necesariamente que acompañar el nacimiento de las primeras leyes laborales.

De la misma manera, la aprobación de la ley de accidentes de trabajo, que contemplaba la indemnización de los obreros accidentados mediante sociedades de seguros, supuso la primera experiencia de seguro obrero, antes de la creación del Instituto Nacional de Previsión, cuyo modesto objetivo inicial fue estimular y subvencionar la cobertura del riesgo de vejez (retiro obrero).

### *El pensamiento social de Dato*<sup>9</sup>

Dato simboliza otra etapa dentro del conservadurismo. Su posición decididamente social-reformista queda bien definida en sus discursos académicos, tanto en los de la Academia de Jurisprudencia como en el de recepción en la Academia de Ciencias Morales sobre «la justicia social». Como presidente en la Academia de Jurisprudencia madrileña, cargo en el que sustituye por cierto a Canalejas, fue el encargado de disertar en la inauguración de los cursos, 1906-07 (sobre «Las instituciones reformadoras de la juventud delincuente y de la necesitada de corrección y tutela»), 1907-08 (sobre «La moral

---

8. A. Osorio, *El sedimento de la lucha*, Madrid, Aguilar, 1933. Él mismo había publicado en 1902 un interesante comentario sobre la recién aprobada ley de accidentes, subrayando su carácter innovador en el panorama jurídico español.

9. Sobre Dato y su participación en la política social, véase los trabajos de C. Seco Serrano, *Perfil político y humano de un Estadista de la Restauración*, discurso de recepción en la Real Academia de la Historia, Madrid, 1978, y «Regeneracionismo y tensiones sociales en torno al Gobierno Silvela 1899-1900», *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea*, 113 (1978).

en el Código Civil») y 1908-09 (sobre «El significado y representación de las leyes protectoras del trabajo»). De estos tres discursos, es el último el que más nos interesa ahora, aunque el primero define quizá mejor la perspectiva específicamente conservadora en el tratamiento de la cuestión social (la reforma moral penitenciaria de la juventud abandonada y delincuente).

Lo que llama la atención del discurso de febrero de 1909, aparte de la afirmación esencialmente positiva, además de ineludible, de la tendencia social intervencionista, es la visión excesivamente optimista, casi idílica, que presenta, confiando en los buenos efectos pacificadores que la legislación social estaba produciendo en el país. Esa virtud pacificadora, suavizadora y encauzadora del conflicto social, que Dato atribuye al reformismo social intervencionista, es lo que legitima e identifica esa política como parte del programa conservador. Frente a la utopía subversiva y revolucionaria, el reformismo intervencionista cumplía una doble función, conservadora y reformadora a la vez.

Dato había comenzado su discurso justificando doctrinalmente la aparición y desarrollo de este nuevo código en potencia que acabaría configurando el conjunto de leyes obreras, pues las nuevas realidades económicas y sociales no podían encerrarse en los principios del código Civil: la culpa o responsabilidad civil y la libertad de contratación. El discurso contenía un balance muy optimista del desarrollo alcanzado por la legislación obrera en España, desde las leyes de 1900 hasta las últimas de 1908, con una referencia especial al recién creado Instituto Nacional de Previsión. Dentro de esa visión casi idílica destacaba la labor integradora del Instituto de Reformas Sociales, donde convergían y colaboraban patronos y obreros, así como políticos y técnicos de distinta procedencia ideológica. Había buenos patronos que no se resistían a la legislación social, y buenos obreros que participaban en las tareas del IRS. El resultado era la ausencia de conflicto social. Pero en ese mismo año, los acontecimientos de la Semana Trágica se encargarían de desmentir esa visión excesivamente optimista.

Al año siguiente, en 1910, Dato leyó en la Academia de Ciencias Morales y Políticas su discurso de recepción sobre «Justicia social»,<sup>10</sup> discurso eminentemente doctrinal y erudito, como corresponde al lugar y la ocasión, pero, precisamente por eso, muy interesante para comprender las claves ideológicas de su pensamiento social.

Entre las múltiples referencias bibliográficas citadas, claramente se ve el predominio de los autores franceses. Precisamente uno de los capítulos más interesantes del discurso era su referencia polémica y bastante crítica con la corriente de moda en el pensamiento social francés, «el solidarismo».<sup>11</sup> Dato

---

10. E. Dato, *Justicia social*, discurso de recepción en la RACMP el 15-5-1910, en *Memorias de la RACMP*, vol. IX, Madrid, 1914, 7-170.

11. *Ibid.*, 92-124.



insistía en demostrar los débiles fundamentos científicos de dicha filosofía para destacar más su tesis central: el fundamento moral del reformismo social intervencionista. Lo que rechazaba del solidarismo era sobre todo su carácter secularizador, su intento de dar una base científica, neutral, a valores morales. Su concepto de «justicia social» no implicaba la suplantación de la caridad por la filantropía. Enlazando con la tradición cristiana y con el pensamiento católico-social Dato consideraba compatibles y complementarias la justicia social y la caridad cristiana. Siguiendo a algunos mentores del catolicismo social<sup>12</sup> definía la justicia social como el «advenimiento de un orden social en el que el cristianismo habrá recobrado su lugar propio», pues la caridad cristiana vendrá a potenciar, pero también a suavizar los impulsos de la justicia social. En todo caso, este alegato en favor de la caridad cristiana como motor y fundamento moral de la justicia social, que le separa de los «solidaristas franceses» y de los reformistas liberales españoles, («institucionistas»), no implicaba la consagración de las viejas recetas tradicionales de caridad de los ricos y resignación de los pobres, porque, concluye Dato, «hoy la caridad hay que entenderla como reconocimiento de un deber y no como gracia que se otorga, y la resignación exige que se la estimule con la proclamación que la justicia haga del derecho del débil».<sup>13</sup>

Dato dedicó otro largo capítulo de su disertación a definir el concepto y la tendencia, tan en boga en políticos y sociólogos, de la «socialización», término en el que se sintetizaba esa corriente imparable que consagra la cada vez mayor intervención social del Estado en nombre de los intereses sociales o colectivos. Tendencia que Dato no rechaza, pues él mismo se inscribe en ella, pero que matiza sustancialmente apelando a la «acción social» (de los grupos sociales) como complementaria y preferible, corrigiendo así un excesivo intervencionismo, y subrayando otro de los principios básicos del catolicismo social, el de subsidiariedad.<sup>14</sup> Frente a la concepción del Estado del sociólogo, Ward prefiere la de Hammer y la de Paul Leroy-Beaulieu,<sup>15</sup> que establecen una distinción clara entre el Estado y la sociedad y sus respectivas funciones: «El Estado, tal como yo lo concibo, no puede oponerse al natural y provechoso desarrollo de la sociedad... no siendo otra su misión que la de respetar las manifestaciones sociales y armonizarlas, pues que éste es el fundamento y el fin del derecho».<sup>16</sup>

Desde esta concepción ensaya una definición de política social o de «socialización»: «Por socialización del derecho entiende Hammer el estable-

---

12. En apoyo de su tesis de la caridad como factor moral irremplazable, cita varios autores del catolicismo social como Ch. Antoine, *Curso de Economía social*, o al Abbé Millot, *Que faut-il faire pour le peuple? Esquisse d'un programme d'études sociales*, París, Lecoffre, 1901.

13. *Ibid.*, 169.

14. *Ibid.*, 124.

15. Hammer: *La socialisation du droit*, París, Giard, 1905; P. Leroy-Beaulieu, *L'État moderne et ses fonctions*, París, Guillaumin, 1900.

16. *Ibid.*, 138-139.



cimiento gradual de una protección legislativa de los débiles, subordinando los intereses individuales a los intereses sociales [...]». Esa socialización o intervención legislativa del Estado, que se hace en nombre de la dignidad y personalidad individual, eran reclamadas tanto por el «progreso moral» como por el «progreso político».<sup>17</sup>

Tras esos preámbulos doctrinales, Dato se definía dentro de una posición ecléctica que entendía era la dominante en el momento, si se observaba la evolución de las dos principales ideologías: el liberalismo y el socialismo. El último apartado de su discurso, antes de concluir con su definición de justicia social, lo dedicaba precisamente a subrayar la doble crisis y evolución convergente del liberalismo y del socialismo. Se detenía especialmente en el auge del socialismo reformista y del sindicalismo no revolucionario, especialmente en Inglaterra y Alemania, destacando el papel que, en su opinión, había jugado precisamente la progresiva implantación de la legislación social en la moderación de las posiciones socialistas. En ese contexto ecléctico se explica el éxito del catolicismo social, cuya propuesta intermedia define como «individualismo social» «que [...] busca la estabilidad social por la elevación del individuo y por la organización de las fuerzas sociales».

Las últimas páginas de su discurso las dedicó Dato, a modo de conclusión, a definir las aportaciones respectivas del Estado, los grupos sociales y los individuos, a la realización de la justicia social. En esas últimas definiciones queda clara su posición moderadamente intervencionista, y la importancia que en este momento concedía a la reforma moral del individuo, como presupuesto de la reforma social, y, por tanto, a las iniciativas sociales impulsoras de esa reforma moral del individuo: «La justicia social [...] no es ni puede ser obra del Estado, sino del individuo y del deber social que él tiene que cumplir».<sup>18</sup>

En definitiva, lo que interesa destacar del discurso de Dato en la Academia de Ciencias Morales es el protagonismo que concede a la iniciativa social sobre la estatal, y la prioridad de la reforma moral como paso previo de la social, elementos ambos que definen bastante bien la posición ideológica del reformismo conservador y católico. El liberal Amós Salvador, en el discurso de contestación, sin entrar en el fondo del tema tratado, subrayaba el carácter moderno del conservadurismo que representaba Dato. Tras destacar su participación en la «introducción de las ideas socialistas en la vida legislativa del país», afirmaba: «acepto con pena el que sea conservador,

---

17. *Ibíd.*, 145.

18. *Ibíd.*, 164. Las referencias citadas seguían siendo francesas, la revista de la escuela de Le Play, *La «Reforme Sociale»*, o el «*Manuel sociale pratique*» de *L'Action Populaire* francesa, verdadero vademécum de diversas asociaciones para la mejora material y moral de las clases populares. Pero en España en ese momento la Sección española de la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, que presidía el propio Dato, estaba impulsando la creación de asociaciones análogas a las citadas por el manual francés.

porque él lo dice; pero en lo que no cabrá duda, después de lo dicho, es en afirmar que, si lo es, lo es a la moderna».<sup>19</sup>

El perfil necrológico que Leopoldo Palacios dedicó a Eduardo Dato «como político social», en 1921, puede servirnos de contrapunto para contrastar el optimista reformismo social de Dato hasta aquí reseñado. Palacios define el criterio de Dato como «intervencionista y católico, pero liberal-conservador». Por eso, según él, nunca sale de su sentido de «protección», sin entrar jamás en la esfera de la «emancipación» de los obreros, aunque valoraba su capacidad de suscitar la colaboración de personas de distinta militancia en tareas comunes. Al repasar la contribución de Dato a la reforma social en España, destaca especialmente la ley de accidentes de 1900 como lo más original y transcendente, a la vez que lamenta la resistencia patronal a la aplicación y desarrollo de esta ley. Recuerda también su contribución en los primeros momentos del Instituto Nacional de Previsión, así como sus discursos académicos en la Academia de Jurisprudencia y en la de Ciencias Morales y Políticas. Pero Palacios, a la altura de 1921, en pleno auge de la conflictividad social, de la que en definitiva había sido víctima el propio Dato, se muestra pesimista y desencantado respecto a las ilusiones que el propio Dato y otros reformadores habían puesto en los efectos pacificadores de la política social.

Para Palacios la política social en España, abordada con retraso, había fracasado, a pesar de los esfuerzos de reformistas como Dato, bloqueada por contradicciones políticas de fondo. La contradicción e incompatibilidad de fondo entre el sentido «protector» que impregna los proyectos reformistas, y el sentido «emancipador» que alienta en las reivindicaciones obreras habría impedido que los efectos pacificadores y armónicos previstos se cumplieran. Además, la pugna entre católicos y socialistas en el Instituto de Reformas Sociales, en torno a la cuestión de la legítima representación obrera, con motivo de las elecciones de los representantes obreros y patronales, y la confección del censo de asociaciones, contribuyó a enrarecer el clima de diálogo que debería haber presidido el IRS.

### *Canalejas y el Instituto del Trabajo: la incorporación de los liberales al reformismo social*

Al giro social del conservadurismo que representa Dato, parece replicar el nuevo programa liberal que propone Canalejas en el gobierno de 1902. Dentro de ese programa, con un contenido social amplio y concreto, estaba el proyecto de crear el Instituto del Trabajo, precedente inmediato del Instituto de Reformas Sociales (IRS). Una memoria vindicativa sobre los traba-

---

19. Salvador Amós, «Discurso de contestación», en *Memorias de la Rcnmp*, vol. IX, 185.

jos preparatorios para la creación de dicho instituto y los debates parlamentarios consiguientes, escrita por el propio Canalejas y sus más estrechos colaboradores en esta empresa, los profesores de la Universidad de Oviedo Adolfo Posada y Adolfo Álvarez Buylla, y el periodista Luis Morote, revela bien el significado político de dicho proyecto, a la vez que nos permite, a través de Canalejas, un acercamiento al giro social del partido liberal.<sup>20</sup>

El libro, publicado tras la dimisión de Canalejas, y no habiendo sido aún aprobado el proyecto, más por cuestiones de trámite que por verdadera oposición política, es sobre todo un alegato político en favor del intervencionismo social, en un intento de renovar el agotamiento del programa liberal. El proyecto de creación del Instituto, junto a la propuesta de otras reformas sociales, formaba parte del pacto programático que dio vida al nuevo gobierno liberal surgido de la crisis de marzo de 1902. Canalejas, en el «discurso preliminar» del mencionado libro, destacaba ese objetivo político: comprometer al partido y al gobierno liberal en una decidida política de reformas sociales, acabar con los clásicos recelos anti-intervencionistas.

Este significado político llevaba a los autores del libro a marcar las diferencias con los liberales antiintervencionistas y con todos los conservadores «reaccionarios» y ultramontanos que se oponían al reformismo social, apelando en su contra a los ejemplos europeos conservadores y católico-sociales abanderados del intervencionismo. En línea con el esquema de interpretación del libro de Francesco Nitti y los planteamientos de Gumersindo de Azcárate y otros krausistas, difundidos hacia 1890, se trataría de espolear a los católicos y conservadores españoles con el ejemplo extranjero.<sup>21</sup>

Lo que ocurre es que este planteamiento, ajustado quizá al momento de aparición de *Rerum Novarum* (1891), no lo era tanto, tras una década en la que la conciencia social católica y, concretamente, la posición pro-intervencionista de los católicos españoles se había manifestado ya de manera clara en varias ocasiones, la más próxima en el Congreso Católico de Santiago de 1902.

En fin, el alegato de Canalejas y los creadores del Instituto, en nombre de un nuevo liberalismo de contenido social, no llegaba al extremo de negar las aportaciones de los conservadores, y muy especialmente de Dato, reconocido como representante de un nuevo conservadurismo, al reformismo social. Al contrario, tanto Canalejas, Posada y Buylla en la explicación de los antecedentes del Instituto, como Morote, en su comentario a los debates parlamentarios, destacaban elogiosamente la posición de Dato, y la de algu-

---

20. Posada, Buylla, Morote, *El Instituto del Trabajo*, Madrid, 1902, con un discurso preliminar de J. Canalejas, ed. facsímil, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1987, con prólogo de S. Castillo. Sobre el programa de Canalejas, véase S. Forner Muñoz, *Canalejas y el liberalismo*, Madrid, Cátedra, 1993.

21. véase F. Nitti, *El socialismo católico*, Salamanca, 1893, trad. de P. Dorado Montero y prólogo de A.A. Buylla. El punto de vista de Azcárate en su discurso en el Ateneo de Madrid el 11-XI-1892, «Deberes y responsabilidades de la riqueza», ed. en *Estudios sociales*, 1933, 100-199. Sobre la recepción krausista de la *Rerum Novarum* véase mi libro *El primer catolicismo social y la Rerum Novarum*, Madrid, CSIC, 1983, 100-110.

nos otros conservadores, como Burgos Mazo y el vizconde de Eza, que se manifestaron en los debates decididamente pro-intervencionistas.

Así pues, salvo contadas excepciones, como la que representa Romero Robledo, el consenso político en torno al intervencionismo social, en el momento en que se creó el Instituto de Reformas Sociales, sobre la base del modelo diseñado por Posada, Buylla y Canalejas, era prácticamente total. Ello puede explicar que el debate parlamentario sobre el proyecto canalejista fuera tan breve en comparación con los anteriores debates sobre el significado de la huelga general de Barcelona, o sobre el programa social pactado por el nuevo gobierno liberal, tras la crisis de marzo.

El periodista Morote, en su comentario al debate parlamentario,<sup>22</sup> criticaba la ignorancia bastante general, entre los políticos y parlamentarios españoles, de los términos concretos de la cuestión social y de las alternativas reformistas que se estaban dando en otros países. Las intervenciones del alcalde de Barcelona Dr. Robert serían, según Morote, paradigmáticas de esa ignorancia o desconocimiento. Ridiculizaba especialmente la posición meramente represiva y profundamente individualista de Romero Robledo, opuesto a cualquier cambio del programa liberal, mientras comentaba irónicamente el decidido reformismo social del diputado conservador Sr. Burgos Mazo, que quería ir más allá del proyecto gubernamental.

El proyecto de creación del Instituto del Trabajo y los alegatos y debates consiguientes nos permiten también perfilar las posibles diferencias y convergencias entre los reformismos sociales de Dato y Canalejas, de conservadores y liberales. Como se ha dicho, los autores del libro sobre el Instituto trataron de subrayar diferencias, aunque reconocieron honestamente las coincidencias básicas.

En todo caso, las diferencias se manifestaron no tanto en relación con el Instituto del Trabajo, con cuyos objetivos y funcionamiento estaban todos básicamente de acuerdo, salvo en el tema, por otra parte fundamental, de la selección y carácter administrativo del personal del Instituto, sino en relación con otros contenidos y compromisos del programa de reformas sociales presentado por Canalejas. Lo que suscitaba mayores recelos de dicho programa era, de un lado, su propuesta de legislar globalmente sobre el *contrato de trabajo* con el reconocimiento consiguiente del contrato colectivo pactado por sindicatos y asociaciones obreras legalmente reconocidas, y, sobre todo, sus propuestas sobre la propiedad de la tierra, especialmente la referida a la expropiación por causa de utilidad social. Los recelos y las

---

22. Morote escribe una interesante crónica de estos debates parlamentarios, y critica precisamente esta falta de atención parlamentaria a una cuestión concreta y práctica como el proyecto de creación del Instituto del Trabajo, en comparación con la retórica demasiado general e imprecisa, más atenta a las cuestiones políticas que propiamente sociales, que suscita la interpelación sobre la huelga general de Barcelona, y la de Silvela sobre el significado de la crisis de marzo y el nuevo programa con que se presentaba el gobierno del que formaba parte Canalejas.

diferencias manifestadas por Maura y Silvela en relación con estas cuestiones si fueron especialmente subrayadas por Morote en su crónica parlamentaria y por el propio Canalejas en su alegato político.

El pensamiento social de Canalejas y sus propuestas reformistas en 1902, a pesar de su indudable carga política oportunista y coyuntural (era una de las señas de identidad del nuevo programa liberal que intentaba liderar), no era una fiebre reciente ni improvisada. Como él mismo recuerda en su discurso «preliminar» de presentación del Instituto del Trabajo, ya en 1894, en el discurso inaugural de la Academia de Jurisprudencia, había presentado un amplio panorama de reformas sociales. Como ministro de Gracia y Justicia, en ocasión anterior había propiciado la presentación de algunas reformas de carácter social.

Después de esta breve experiencia ministerial de 1902, otra vez en sesiones de inauguración de la Academia de Jurisprudencia madrileña, volvería a presentar su conocimiento profundo de los fundamentos y reformas sociales concretas vigentes en ese momento en Europa. Su discurso de 1903 sobre la progresiva implantación de las ciencias sociales en el mundo universitario como base científica de la reforma social que progresivamente se iba implantando, y, sobre todo, su discurso de 1905, en presencia del joven Alfonso XIII, constituye quizás la mejor y más amplia exposición, en términos académicos, de un proyecto global de reformas sociales para España, que abarcaba desde la legislación social protectora hasta las reformas fiscales, tributarias, y las reformas del Código Civil precisas y complementarias.<sup>23</sup>

Las fuentes doctrinales del pensamiento social de Canalejas eran las krausistas y sus colaboradores más estrechos en la proyección política concreta de ese pensamiento fueron los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, desde Gumersindo de Azcárate hasta los profesores de Oviedo, Posada y Buylla, todos ellos fundadores y sostenedores del Instituto de Reformas Sociales.

El decreto de creación del Instituto de Reformas Sociales (IRS) fue finalmente decisión del gobierno conservador de Silvela, pero siguiendo el modelo del proyecto de *Instituto del Trabajo* preparado por Canalejas y los institucionistas de Oviedo, un año antes. Así pues, en el cambio de siglo, en el contexto regeneracionista, se aprobaron las primeras leyes laborales de 1900, y se creó la primera administración laboral (Instituto de Reformas Sociales, Instituto Nacional de Previsión, juntas locales y provinciales de reformas sociales, inspectores de trabajo...). Los siguientes pasos en la institucionalización de la reforma social serán compartidos por conservadores y liberales en sucesivos gobiernos. Quizá no es demasiado significativo políticamente que los proyectos y decretos correspondan a gobiernos de uno u

---

23. Véase especialmente los discursos de Canalejas en la Real Academia de Jurisprudencia. *El aspecto jurídico de la cuestión social*, el 10-XI-1894; *La obra social contemporánea*, el 28-III-1905.

otro signo, pues en esos años la reforma social, con todas sus limitaciones, parece un objetivo asumido por todos. Lo importante era el trabajo de preparación y discusión que llevó a cabo el Instituto de Reformas Sociales.<sup>24</sup>

## **La Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores**

Una vez superado el debate sobre el intervencionismo con un amplio consenso, aprobadas las primeras leyes de 1900, creado el IRS, en el contexto regeneracionista español, y en un contexto internacional de auge de las iniciativas social-reformistas, no solamente estatales, se aprecia también entre las élites españolas una cierta fiebre social-reformista, que se manifiesta, a instancia y remolque de iniciativas europeas paralelas, en la creación en 1906 de la Sección Española de Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores y de otras asociaciones con objetivos sociales y morales más específicos, como el paro, la pornografía, el alcoholismo, la protección de la infancia.

Entre 1906, año en que nació la sección española de la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, y 1912, en el que el secretario Pedro Sangro propuso crear la «Unión Española para la Reforma Social» (federación de las siguientes sociedades: Asociación para el estudio del problema del paro, Liga antipornográfica, Sociedad contra el alcoholismo, Comité español de los congresos internacionales de seguros sociales, y Comité español de Tribunales para niños), se desarrolló una actividad propagandística, más voluntarista que eficaz, pero significativa de un cierto giro o ampliación del impulso reformista: del protagonismo del Estado al de la sociedad. Criterio siempre defendido tanto por los católicos-sociales (subsidiariedad) como por los krauso-institucionistas (organicismo). En efecto, según subrayaba Sangro en su «Proyecto de Unión española de reforma social», este conjunto de iniciativas reformistas privadas venían a complementar la labor del IRS: «Ha de ser esa entidad [...] una especie de extensión universitaria del Instituto, y representar la divulgación de sus doctrinas, la reforma social por la libre iniciativa y el internacionalismo de las mismas doctrinas, desde un punto de vista amplio y no de la clase puramente obrera».<sup>25</sup>

La labor de la sección española de la AIPT, según se desprende de las memorias anuales, consistió fundamentalmente en el impulso propagandístico a la reforma social mediante conferencias y publicaciones. Facilitó sobre todo la comunicación con las iniciativas y organizaciones internaciona-

---

24. Sobre el IRS, su organización y funcionamiento, véase J.I. Palacio Morena, *La institucionalización de la reforma social en España, 1883-1924. La Comisión y el Instituto de Reformas sociales*, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1988.

25. P. Sangro, *Memoria de actividades de la sección española...*, 1911, 5.º año, 44.



les e impulsó la constitución de sociedades específicas para la reforma social y moral. Pero, como el propio Sangro criticaba en 1911, su labor se vio muy mermada por la falta de una infraestructura económica y administrativa mínima, y por el carácter restrictivo y acumulativo de las juntas directivas y socios: un mismo grupo de personas de las élites madrileñas, estaban en las mismas asociaciones. Las personas que fundan, presiden y dirigen estas asociaciones son las mismas que encontramos en el IRS y en el INP. Y al igual que en estas instituciones públicas, se observa también la presencia de personas de procedencia ideológica distinta: Dato y Canalejas, Azcárate y Sangro, Buylla y el vizconde de Eza, etc. Y, en cuanto a socios colectivos, la Universidad Popular de Madrid y la revista *La Paz Social*. En definitiva, en estas sociedades para la reforma social, de carácter privado, colaboran una vez más los conservadores y católicos sociales con los liberales reformistas de tradición krausoinstitucionista. En las memorias de la Asociación siempre se suele subrayar el espíritu tolerante y abierto que permite esa colaboración como una de sus señas de identidad. Lo que no significa que también surgieran discrepancias y rivalidades. Es conocida la crítica que en medios católicos suscitaron las disposiciones gubernamentales, especialmente durante la presidencia de Canalejas, sobre la representación obrera en el IRS, y la naturaleza obrera (profesional) de las asociaciones católicas (círculos, sindicatos, etc.).<sup>26</sup>

De todas formas, las discrepancias y rivalidades no debieron ser tan importantes, pues en todas esas asociaciones para la reforma moral que surgieron al lado de la Asociación Internacional para la Protección Legal de los trabajadores, liberales y católicos figuran como dirigentes y como socios, compartiendo unos mismos objetivos reformadores.

## El Instituto Nacional de Previsión

En el Instituto Nacional de Previsión como en el de Reformas Sociales se van a encontrar reformistas sociales de distinta procedencia política e ideológica, en un trabajo esencialmente suprapartidista. La misma preocupación por el neutralismo técnico que presidió la creación del IRS y la selección de su personal, se encuentra en la fundación del INP. En un reciente estudio colectivo sobre los seguros sociales en España se ha puesto especial-

---

26. Otra muestra significativa de esas discrepancias la encontramos, por ejemplo, en un artículo publicado por Amando Castroviejo en *La Paz Social*, en el que se criticaba fuertemente el «liberalismo» de Canalejas, quien en respuesta a una interpelación parlamentaria de Eduardo Sanz y Escartín había manifestado su resistencia a apoyar desde el Estado la censura directa de formas de propaganda pornográfica. Para Castroviejo y para las ligas antipornográficas la intervención reformadora del Estado no debía limitarse al campo sociolaboral, sino que debía abarcar este campo de la reforma moral. A. Castroviejo, «Catolicismo, intervencionismo y acción social», *La Paz Social* (1911), 288-294. La interpelación de Sanz y Escartín y la intervención de Canalejas, el 24-5-1911.



mente de relieve el pluralismo ideológico y político de los propagandistas y gestores del INP.<sup>27</sup>

En el primer equipo del INP, que presidieran Eduardo Dato (entre 1909 y 1913) y el ingeniero militar José Marvá (desde 1913 hasta 1934), participaron asiduamente en los trabajos de los órganos directivos y consultivos, llevando por tanto el peso de las elaboraciones normativas y reglamentarias y de las decisiones, José Maluquer (consejero delegado), el vizconde de Eza, Gumersindo de Azcárate, Matías Gómez Latorre (en representación obrera, procedente del IRS), Adolfo G. Posada, Francisco González Rojas y Felipe Gómez Vallejo.

La elección de Marvá para sustituir a Dato, en 1913, parece querer subrayar más el apartidismo neutral del INP. En cuanto al consejero delegado José Maluquer, su alejamiento de cualquier partido político le permitía establecer puentes con unos y otros. Por lo demás, la adscripción política, liberal o conservadora, o incluso republicana, de los miembros cualificados del INP resulta poco significativa. El compromiso con el programa reformista en general y en concreto con el del INP tenía poco que ver con la respectiva adscripción política. Más significativo es fijarse en la vinculación con grupos o intereses económicos o empresariales, o la presencia obrera socialista en el INP (Matías Gómez Latorre) al igual que en el IRS.

Especialmente significativa es la presencia de católico-sociales en el INP. Parece como si los objetivos del Instituto cuadraran mejor con uno de los objetivos principales de la reforma social católica: la defensa y la protección de la familia tradicional. El seguro de vejez, el de maternidad, las mutualidades escolares y, después de la guerra civil, los subsidios familiares, tendían a proteger la familia en las diversas vicisitudes críticas. Ya en la primera gestación del INP, entre los primeros y más directos colaboradores de José Maluquer se encuentran católico-sociales tan significados como Severino Aznar (organizador del «Primer curso breve de cuestiones sociales» en 1906, en el que Maluquer explicó su proyecto) y Álvaro López Núñez, secretario de la administración central del Instituto desde su fundación en 1908. López Núñez desarrolló una amplia labor propagandista de los objetivos del Instituto, especialmente en el campo de la mutualidad infantil y escolar.<sup>28</sup>

La vinculación directa de Severino Aznar, como la de otros miembros del «Grupo de la Democracia Cristiana», al INP es un poco posterior. Dejando aparte la invitación de Aznar a Maluquer en su intervención en la primera semana social, es a partir de 1914 cuando Aznar redacta como «asesor

---

27. F. Montero, E. Martínez Quinteiro, J. Cuesta, M. Samaniego, *Los seguros sociales en la España del siglo XX*, 3 vols., Madrid, Ministerio de Trabajo, 1988.

28. Su labor como propagandista católico de la previsión y los seguros se inicia tempranamente, desde 1896, con artículos en *El Movimiento Católico*, *El Universo* y, sobre todo, en *La Lectura Dominical* de la que fue director y propietario y firmaba artículos con el seudónimo de «Fr. León».

social» del INP numerosos informes sobre los diversos proyectos de ampliación y modificación de seguros sociales. En esa prolongada tarea que reanuda, tras un breve paréntesis, en 1937 en Santander, lo encontramos especialmente vinculado a la implantación del seguro de maternidad, de enfermedad y del subsidio familiar. Precisamente, la implantación del subsidio familiar con el nuevo régimen de julio de 1936 era la culminación de una de las directrices básicas del reformismo social que propugnaba el catolicismo social.<sup>29</sup> Este proyecto estaba ya presente en su discurso de recepción en la Academia de Ciencias Morales y Políticas sobre «La abolición del salariado», y en su contribución a un libro de homenaje a los 40 años de *Rerum Novarum* editado en Milán, «Del salario familiar al seguro familiar».<sup>30</sup>

Inocencio Jiménez, fundador de *La Paz Social*, y otro de los miembros significativos del «Grupo de la democracia cristiana», trabajó en la propaganda de los seguros sociales y en la fundación de la Caja de Previsión Social de Aragón. Desde 1924, como vicepresidente del Instituto sustituyó de hecho a Maluquer, enfermo, y le sucedió como presidente del INP durante la 2.<sup>a</sup> República.

Como se ha señalado ya, la reforma social, especialmente a partir de 1900, es un objetivo y una tarea fundamentalmente compartida por hombres de procedencia ideológica y política distinta. No se puede considerar patrimonio exclusivo de conservadores, católicos o liberales-institucionistas. Sin embargo, esa convergencia o colaboración en el terreno práctico e institucional no significa una plena coincidencia de criterios y objetivos. Por el contrario, desde el principio se pueden apreciar importantes diferencias ideológicas y políticas que se concretan en algunas rivalidades. Esas diferencias y convergencias nos permiten perfilar mejor la particular y específica contribución conservadora al reformismo social. Sus puntos de encuentro con el catolicismo social son importantes, hasta llegar, en muchos casos, a la identificación. De los criterios institucionistas, en cambio, les separaba una distinta cosmovisión del hombre, a pesar del organicismo social compartido.

*La contribución católica* al triunfo del criterio intervencionista culminó en el Congreso Católico de Santiago de Compostela (1902). En los congresos anteriores, de acuerdo con las directrices de *Rerum Novarum* se habían aprobado mociones de carácter francamente pro-intervencionista, pero fue

---

29. En el largo paréntesis de Semanas Sociales, organizadas por los católico-sociales, que se produce entre 1912 (6.<sup>a</sup> semana de Pamplona) y la de Madrid de 1933, hay que recordar una *semana organizada en Oviedo*, en plena dictadura primorriverista, por el Grupo de la Democracia Cristiana. El tema monográfico de esta semana fue la defensa de la familia, enlazando con los proyectos de seguros que en ese momento trataban de sacarse adelante.

30. Sobre Severino Aznar no tenemos aún un buen estudio. Sigue siendo útil el perfil *La vida y la obra de Severino Aznar*, de C. Viñas Mey. Una buena parte de los trabajos de S. Aznar se publicaron por el Instituto de Estudios Políticos en la colección «Ecos del catolicismo social». Los informes elaborados por S. Aznar como asesor del INP se encuentran en la biblioteca del INP (actual Insalud).

en el congreso de Santiago donde se aprobó una amplia propuesta intervencionista que había sido elaborada durante los últimos años del siglo XIX por la madrileña «Asociación General para el Estudio de los Intereses de las Clases Trabajadoras».<sup>31</sup> Desde el punto de vista ideológico, la contribución católica al reformismo social se puede caracterizar con los siguientes criterios dominantes: intervencionismo decidido pero siempre subsidiario, prioridad de la familia y las corporaciones como sujetos activos y protagonistas de la reforma social, preferencia por el asociacionismo obrero protegido, tutelado (persistencia del modelo paternalista), predominio de la reforma religiosa y moral como fundamento de la verdadera reforma social, de donde deriva el estricto confesionalismo de las obras sociales. Nada tiene de extraño que las iniciativas de reforma moral (como la protección de la infancia abandonada, la liga antipornográfica, la sociedad contra el alcoholismo) que tenían en común la defensa de la familia fueran especialmente queridas por los católicos y en ellas comprometieran especialmente su acción reformista. Esta misma defensa de los valores familiares puede explicar la especial dedicación de los católico-sociales a los trabajos del INP y a la implantación del seguro de vejez, el de maternidad, el subsidio familiar. La cobertura de esos riesgos era la mejor garantía del mantenimiento y protección de un modelo de familia.

En el reformismo social de los «institucionistas» destaca en cambio su cosmovisión organicista, optimista y armónica, de donde surge su confianza en las iniciativas de los grupos sociales (asociacionismo obrero, cooperativas) como cauces para la solución pacífica y armónica del conflicto social.

---

31. Además de la fundación de cinco círculos católicos de obreros, la Asociación había estudiado sistemáticamente varios proyectos sociales, que coincidían en buena medida con los proyectos que en ese mismo tiempo se preparaban en la CRS y presentó Dato. Dichos proyectos fueron publicados en dos folletos en 1899 y 1901 y fueron incorporados en la memoria que la Asociación presentó al Congreso Católico de Santiago. Véase mi libro *El primer catolicismo social...*, op. cit., 328 y ss.